



En 1971, un grupo internacional de objetores de conciencia intentaron una marcha a pie desde Ginebra hasta la prisión de Valencia, donde estaba detenido Pepe Beuzin. En la frontera franco-española la Policía les impidió el paso.

Justicia y Paz el mes de mayo pasado: la creación de un Cuerpo de Voluntarios para el Desarrollo que «efectuara labores de promoción social y en el que, de manera desinteresada, participarían jóvenes de ambos sexos», sirviendo como cauce para aquellos que «podrían así cumplir deberes de solidaridad nacional que les servirían para quedar exentos del Servicio Militar, si su conciencia así se lo exigiese, con la compensación de un tiempo complementario como testimonio o prueba de la rectitud de su intención y de su firme deseo de contribuir al bienestar de la sociedad española».

Pero desde mayo han pasado ya ocho meses, y la única contestación oficial hasta ahora es un oficio de Presidencia del Gobierno (6 de junio), en el que se da por recibida la propuesta de Justicia y Paz y se comunica que ha pasado a ser estudiada — como iniciativa o sugerencia — por diversos organismos. Poco menos que nada, sobre todo para responder a una iniciati-

va que, avalada por 1.250 firmas de hombres y mujeres que se comprometían previamente a realizar ese Voluntariado para el Desarrollo, resolvería un problema de creciente gravedad dentro de la sociedad española. Y que prácticamente en todas las sociedades europeas ha sido ya planteado positivamente al reconocer la objeción de conciencia.

Los autores del Manifiesto han decidido no seguir esperando y pasar a la acción cívica: «Ir a la guerra, sí, pero a la guerra contra el analfabetismo, contra la falta de guarderías y de locales de ancianos. Hemos sido llamados al servicio de la Patria y hemos acudido a nuestro modo», dicen en su proclama, afirmando que «a menos que seamos encarcelados, continuaremos trabajando en este barrio durante dos años, llevando adelante los servicios en los que estamos y aceptando una inspección del Gobierno. La solución —insistimos—, dentro de unos días. ■ FERNANDO LARA.

LOS CORRALES DE BUELNA

El pueblo de la marcha

«Trabajo, sí. Palabras, no», decía una pancarta que llevaban los obreros que desde Los Corrales de Buena marchaban a pie hacia Santander, situado a cuarenta kilómetros de distancia del pueblo, a fin de sensibilizar a la opinión pública sobre la situación en que les ha dejado el cierre de la factoría Authi.

Estuve a mediados de semana en Los Corrales de Buena para conocer con algún detalle la situación de un problema que ha conducido a lo que puede calificarse de un verdadero hito, al menos por lo que respecta a España, en la historia del movimiento obrero.

El pueblo se encuentra en la carretera que desde Palencia se dirige, por el puerto del Pozal y Reinosa, hacia Torrelavega y Santander.

Desde Reinosa, la carretera baja por un precioso desfiladero, las llamadas hoces del río Besaya, y pasa por pueblos llenos de viejas casonas montañesas: Pesquera, Bárcena de Pie de Concha, Silió, que queda un poco apartado a la derecha de la carretera; Las Fraguas...

Los Corrales de Buena tiene también un núcleo antiguo con edificaciones de piedra y viejas casas santanderinas con galerías y cortavientos. Aún está en pie la torre del famoso Pero Niño, almirante de Castilla. Pero la verdadera solera del pueblo, su carácter dominante, es industrial. Todas las personas con las que he hablado estos días —el enardecimiento provocado por los hechos me ha facilitado entablar en seguida conversación con la gente

en bares y mesones— me recordaban que, ya en 1917, los trabajadores de Los Corrales mantuvieron una huelga que duró nueve meses en defensa de la jornada de ocho horas. Me contaban la historia con una mezcla de satisfacción de clase por la reciente hazaña de la marcha sobre Santander y orgullo local de pueblo pequeño, cuyo nombre ha sido noticia importante en España y fuera de ella. «En París, en Londres, en Pekín, en el Japón y en el mundo entero han hablado de la marcha», dijo uno mientras merendábamos los excelentes chorizos y morcillas que había preparado la tía Pirulina en la tabernita que regenta en el barrio de La Mata.

De la vieja fábrica de harinas que hubo en Los Corrales hace un siglo se pasó después a la fabricación de herrajes, tachuelas y otros productos de rudimentaria siderurgia, en lo que constituyó el núcleo de las Forjas de Buena, creadas por la familia Quijano. Su principal representante, José María Quijano, fue un empresario muy al estilo «Rerum Novarum» y hombre por cuya iniciativa y humano trato es recordado en el pueblo. Mandó construir, además de la iglesia, escuelas para los niños y un centro de Formación Profesional, que hoy regentan los hermanos de La Salle y que ha jugado un papel importante en la tradición industrial de Los Corrales.

La fusión, realizada ya después de la guerra, de Forjas de Buena con la empresa, también santanderina, Nueva Montaña, dio lugar a la Nueva Montaña Quijano en torno de la cual gira todo el desarrollo industrial de Los Corrales de Buena. Asociada con Philips, constituyó la fábrica de electrodos que hasta hoy sigue trabajando en el pueblo. Hacia 1957, los hornos de Los Corrales comenzaron a dedicar parte de su actividad a la fabricación de piezas de automóviles destinadas a la factoría de Fasa-Renault, en Valladolid. Posteriormente, la asociación de Nueva Montaña con British Leyland dio lugar a la creación de Authi. En 1969, tras una serie de arreglos financieros, Authi se separó de Nueva Montaña y se dividieron las instalaciones de la forma que hoy puede verse en el recinto de la fábrica, asignándose aproximadamente la mitad del personal a cada una de las empresas.

Cuento todo esto para hacer notar lo que representaría para Los Corrales de Buena, si no se encuentra una solución satisfactoria al problema planteado, el cierre de la factoría Authi. Los dos mil cien puestos de trabajo que la fábrica ofrecía cuando suspendió sus actividades representan más o menos la mitad de los existentes en el pueblo, repartiéndose el resto Nueva Montaña Quijano y la fábrica de electrodos, así como algunos pequeños talleres y los servicios, que dependen casi exclusivamente de la población industrial.

El pueblo de Los Corrales de Buena tiene alrededor de diez mil habitantes, y las factorías dan vida a muchos otros pueblos y aldeas del valle, de carácter eminentemente rural, como pude comprobar en la vecina Collado al cruzarme en las empinadas calles del pueblo con mulas y vacas. Entre un treinta y un cuarenta por ciento de los obreros de las fábricas alternaban su dedicación industrial con el minifundismo agrícola y ganadero. La pérdida de estos dos mil cien puestos de trabajo, por tanto, significaría o bien la emigración o bien la vuelta a unas condiciones exclusivamente basadas en la agricultura.

Sucede esto además en la provincia de Santander, donde no abunda la industria. Aparte de Los Corrales de Buena y de Torrelavega y Santander, son muy pocos los centros industriales de la Montaña. Algunos sostienen, y he oído el argumento repetido varias veces, que las «fuerzas vivas» santanderinas desean conservar la bucólica paz y los bellísimos paisajes de Cantabria, incontaminados de humos y ruidos. Otros se atreven a asegurar que la no industrialización de Santander se debería a un deliberado propósito de centralismo administrativo que desea dejar una «zona verde» sin conflicto entre los

dos colosos, Asturias y el País Vasco, que sirva de «colchón» en el «temible Norte». No sé qué habrá de cierto en estas acusaciones, pero lo que sí me consta es que son muchos los santanderinos que desean ver en su provincia fábricas que les proporcionen puestos de trabajo, y también que están dispuestos a defender hasta el fin los pocos que tienen.

De estas cosas estaba yo hablando con la gente del pueblo en la barra del mesón El Cazador, mientras esperábamos que llegara de Madrid la representación de los Jurados de Empresa que el día anterior había visitado a varios ministros del Gobierno para exponerles su situación y tratar de obtener una comunicación oficial que pusiese fin a la zozobra en que vive el pueblo desde hace mucho tiempo. «Digamos que nuestra credibilidad ha aumentado», decía uno de los jurados cuando le pedían que resumiera el resultado de las entrevistas. Y añadía: «Pero queremos hechos, no solamente buenas palabras». No necesito extenderme sobre la solución que, al parecer, se intenta dar al caso. Una nueva empresa, la Motor Ibérica, se subrogará —si se pasa de las palabras a los hechos— en las obligaciones de Authi. El lector encontrará en la prensa diaria la solución del caso, si la hay, que se prevé para estos próximos días, o en su defecto, las decisiones que puedan tomar los trabajadores.

La historia del conflicto es, brevemente contada, la siguiente: Como consecuencia de las dificultades por que atravesó la empresa desde principios de 1974, derivadas de la crisis económica internacional, la British Leyland decidió vender a General Motors su filial en España, Authi. El Gobierno español en diciembre de 1974 negó a la General Motors su entrada en el mercado nacional del automóvil alegando ser contraria a los intereses nacionales. Al hacerlo así, el Gobierno se comprometió verbalmente a garantizar los puestos de trabajo que desaparecieran como consecuencia del cierre de la factoría. En junio de este año, la fábrica de Los Corrales de Buelna suspendió sus actividades después de que en marzo hubiese sido autorizado el expediente de regulación de empleo presentado por la empresa. En julio, el Jurado de Empresa no se opuso, en beneficio de los trabajadores de las factorías de Authi, en Pamplona y Manresa, a que se buscaran soluciones parciales para estos dos centros. El Gobierno se comprometió entonces nuevamente a resolver los casos de los centros de la empresa en Madrid y Los Corrales de Buelna.

Los trabajadores han seguido hasta ahora cobrando su paga, y su protesta se basa en la inseguridad en que se les ha mantenido respecto de su futuro durante dos años, desde que comenzaron las dificultades de la empresa. El Gobierno no ha dado comunicación oficial alguna que diera credibilidad a sus promesas. Durante este tiempo los obreros han celebrado varias asambleas. La de septiembre de 1974, que tuvo lugar en la factoría de Authi de Los Corrales, según me decían, fue la primera celebrada en la provincia de Santander.

Cuando el día 22 de diciembre pasado los trabajadores acudieron a la fábrica para cobrar su paga correspondiente al mes de diciembre, les fue entregada una nota en la que se les informaba que la empresa había solicitado de los organismos laborales la rescisión de todos los contratos de trabajo, pasando los obreros a percibir las prestaciones del Seguro de Desempleo.

Fue en el momento de recibir esta nota cuando los trabajadores, de forma espontánea, decidieron hacer una marcha «hasta donde nos dejen». Habían abandonado anteriormente la idea de un encierro en la factoría. La iniciativa de la marcha tuvo un antecedente cuando, días antes, el 18 de diciembre, unos quinientos trabajadores fueron a Santander en coche para manifestar su inquietud ante las autoridades. Pero, como me decían los trabajadores, el día 22 nadie pensaba que fuese posible una marcha a pie hasta Santander.

Desde la fábrica, cuando el número de traba-



Los obreros de Authi, durante su marcha de cuarenta kilómetros sobre Santander.

jadores presentes había llegado a unos mil doscientos, se dirigieron a la delegación comarcal de Sindicatos pidiendo al delegado que comunicase al delegado provincial para que lo hiciese saber al Ministerio la inquietud de los trabajadores por la falta de alguna comunicación oficial a pesar de sus reiteradas peticiones.

La manifestación, que se había ido engrosando, se dirigió de forma espontánea hacia la carretera de la capital de la provincia y comenzaron a oírse gritos de «A Santander». Eran las cuatro de la tarde.

Cuando llevaban unas dos horas de camino, en el pueblo de Ricorvo, situado a unos siete kilómetros de Los Corrales, hicieron su aparición dos motoristas y dos coches de la Guardia Civil de Tráfico, cuyo único propósito era el de ordenar el tránsito por la media calzada que en todo momento dejaron libre los trabajadores. En el pueblo de Cartes, por propia iniciativa, los manifestantes se desviaron por el interior del pueblo para dejar libre la carretera a lo largo del tramo que lo bordea. El número de manifestantes era ya entonces de unas mil seiscientas personas, entre las que iba una sola mujer, una empleada de las oficinas. En Torrelavega se unió una segunda.

Nuevamente en la carretera, la Guardia Civil pidió a los manifestantes que marcharan por el lado derecho de la calzada. En todas las poblaciones por las que pasó, la manifestación fue aplaudida y alentada por la gente. Incluso en Torrelavega y en Santander, adonde llegaron ya muy tarde por la noche, salieron numerosas personas a recibirlos. Proprietarios de bares y tabernas se negaban a cobrar las consumiciones de vino y bocadillos que los manifestantes pedían. Como algunos de los trabajadores que integraban la marcha anduviesen con los pies descalzos y los zapatos al hombro, se dio el caso de algún comerciante que regaló alpargatas a los caminantes. Automovilistas particulares ponían su coche a disposición de los que, por agotamiento físico, no podían continuar la marcha.

Los trabajadores con quienes hablé me comentaron elogiosamente la actitud adoptada por las autoridades provinciales y municipales de algunos pueblos y ciudades por los que pasaron ante la celebración de la manifestación. «No podemos decir lo mismo de nuestras autoridades locales», decían. No es cosa de recoger

aquí los méritos y deméritos de cada uno, pero, según me dijeron, hubo cargos sindicales que se unieron y dieron su apoyo a la marcha, y alguno de ellos anduvo durante horas al lado de los manifestantes. Un alcalde puso a disposición de la marcha unas ambulancias para el caso de que fueran necesarias.

Alrededor de unas cien personas fueron atendidas en el sanatorio de Valdecilla como consecuencia de la manifestación. La noche era muy fría. Iban en la marcha muchas personas de edad madura, próximas a la jubilación. El día que estuve en Los Corrales había aún una persona internada en el sanatorio. Otras fueron atendidas al regresar a casa.

Eran las doce de la noche cuando la marcha llegó a Santander. En los Cuatro Caminos, la Policía Armada y la Policía Municipal se encargaron de conducirla por las calles de la ciudad, sustituyendo a la Guardia Civil. Se dirigieron a la Delegación de Sindicatos. Una comisión de quince delegados fue recibida, a la una de la madrugada, por el gobernador civil, quien dispuso que se utilizaran autobuses de la Empresa Municipal de Transportes para que los manifestantes pudieran regresar a casa. Llegaron a Los Corrales a las tres de la madrugada.

He visto en las conversaciones que he sostenido en Los Corrales, una gran unanimidad entre los trabajadores. Se mostraban alineados todos ellos tras sus representantes que ellos mismos eligieron; decididos a no ceder en sus pretensiones hasta tanto que la totalidad —y repetían la palabra— de los trabajadores no tuviera garantizados sus derechos y obtuvieran el puesto de trabajo que les prometieron que no perderían, evitando así la depresiva situación de tener que vivir de los fondos públicos del Seguro de Desempleo.

Todo son palabras, todavía. Aún no hay el trabajo que se pedía en las pancartas. Es posible que en los próximos días se llegue a una solución del problema. Y entonces habrá que preguntarse si estamos ante una nueva política o si se va a hacer un aprovechamiento teatral de este caso santanderino. El tiempo lo dirá. En Los Corrales de Buelna he oído decir también: «Nosotros nos negamos a ser el «colchón» entre Asturias y Vizcaya. Nosotros estamos y estaremos con Vizcaya y con Asturias». ■ LUIS CARANDELL.